

## EL RECUADRO

El año 2020 se ha cerrado en España con un paisaje empresarial desolador que definen datos como la desaparición de unas 105.000 empresas, las 225,000 que, según el Banco de España, son ya "sociedades zombies" o la caída del 14,2 por ciento de la facturación.

En el terreno socio-laboral a final de año se registraban unos 3,90 millones de desempleados, ya en febrero el número de trabajadores acogidos a un ERTE se situaba en unos 900.000, y el ingreso mínimo vital no ha cumplido las expectativas con las que se creó y su alcance es a todas luces insuficiente.

En paralelo, se acerca inexorablemente el fin de las moratorias para los créditos ICO, los concursos de acreedores y los propios ERTE. Así las cosas, todas las esperanzas de reactivación de la economía y el empleo, al margen de lo puramente sanitario centrado en la aceleración y extensión del proceso de vacunación, están en la llegada de los fondos de Recuperación y Resiliencia.

Esos fondos que pueden ser un excelente impulso reformativo para nuestro tejido productivo, permitirían avanzar, una vez cumplidas las condiciones para el diseño de los proyectos y su implementación, hacia una economía más eficiente, sostenible y competitiva que incorpore más innovación y más formación.

Pero no es menos cierto que los cuatro ejes principales del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia -la transición digital, la transición ecológica, la cohesión territorial y social y la igualdad de género- no van a llegar de igual modo a todas las empresas. Serán las de mayor tamaño las que tendrán más capacidad de definir esos proyectos merecedores de las ayudas europeas y de gestionar el acceso a los mismos.

La capilaridad hacia el resto del tejido económico, las pymes, tardará en producirse y cuando ello ocurra, puede encontrarse con problemas inherentes al tamaño de las empresas a la hora de incorporar tecnología e innovación de los que no es el menor la cualificación de los profesionales.

La adaptación de los contenidos y las tareas de los puestos de trabajo y las cualificaciones profesionales han sido siempre un motor del cambio para las empresas y la mejor herramienta para elevar la calidad de sus productos y servicios, reducir costes, abrir y consolidar mercados, internacionalizarse, innovar y mejorar la gestión.

Incrementar las competencias del personal, en mercados cada vez más abiertos y globales, es sinónimo de ser innovador, flexible, versátil, productivo, competitivo... todo lo que exige un momento como el actual en el que, al cambio de los viejos modelos de negocio que han tenido que adaptar su estrategia, para no desaparecer o verse condenados a la marginalidad, se une una crisis global sin precedentes.

En este escenario, la economía española y muy especialmente la industria, van a depender para aprovechar las oportunidades que abren los Fondos Europeos de la capacidad de formar y de favorecer la adaptación y la puesta al día de sus trabajadores.

La transición hacia una economía más digitalizada, más sostenible energética y medioambientalmente y más inclusiva, requiere trabajadores bien cualificados, adaptables y que asuman como imprescindible el aprendizaje permanente.

Innovar, ser competitiva y continuar proporcionando puestos de trabajo de calidad y bien remunerados depende, para una economía, de una formación profesional y continua que busquen la excelencia y que respondan a las necesidades reales de las empresas y los trabajadores.

La participación de quienes conocen las verdaderas necesidades de capacitación y cualificación de los mercados laborales y los sectores productivos es esencial en el diseño y la impartición de la formación y en establecimiento de vínculos entre la formación profesional, la enseñanza superior y la formación continua con el mundo laboral.

Esa visión conjunta del sistema formativo, la actualización continua de los contenidos y la participación de la empresa en el itinerario práctico de la formación, favorecen la empleabilidad, carreras profesionales más largas y satisfactorias, mayor impacto social de trabajo y el refuerzo del estado del bienestar.

En España, a la escasez de cualificaciones y las tendencias demográficas de envejecimiento de la mano de obra en el conjunto de la Unión Europea, se unen en el momento presente las urgencias de una crisis demoledora que exige formación para que los planes de recuperación no sean estériles y permitan crear las bases para una economía sólida, productiva y generadora de empleo de calidad.